

VICENTE MULEIRO

1976

EL GOLPE CIVIL



booket

Vicente Muleiro

1976

El golpe civil

Una historia del mal en la Argentina



Palabras preliminares

Acaso este libro comenzó a escribirse en 1997, cuando con María Seoane pusimos proa hacia *El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla* que publicamos en 2001. En el material de esa investigación el ámbito civil era mucho más que un obvio complemento del golpe de Estado: tanto su trama íntima como el objetivo de subordinar a la sociedad argentina por el terror formaban parte de viejos anhelos de los cuarteles de saco y corbata y del integrismo católico que los bendecía. Había quedado pendiente la tarea de indagar más ese mundo, de indagarlo todo lo posible. Esta obra es el resultado de ese intento. Su factura fue atravesada por la tentación del texto infinito pues así parecían ser los caminos que se abrían. Siempre flotan deudas pendientes; por ejemplo, las redes cívico-militares de nuestras provincias, la microfísica autoritaria de los pueblos, un chequeo más para convertir en información una pista por la que nuestra intuición pide que nos juguemos. Esas sensaciones son inevitables en un trabajo de este tipo, tanto como la certeza de que cada capítulo guarda en sí mismo la posibilidad de un libro, algunos de los cuales ya se han comenzado a escribir y publicar.

1976, *El golpe civil* no hubiera podido concretarse sin la existencia de *El Dictador*, las páginas que siguen son tributarias de aquel ingente trabajo de campo y de escritura. Mi agradecimiento entonces a María Seoane, con quien seguimos compartiendo otras intromisiones en la historia presente. Este trabajo contó con la colaboración invaluable de mi hermano y colega Hugo Muleiro y de los colegas José Luis Cutello, Néstor Restivo, Lucas Miguel, Tomás Pont Vergés y Osvaldo Gallone. El capítulo sobre Papel Prensa fue elaborado sobre la base de un texto que prepara Jorge Mancinelli, quien remó entre las 22.000 fojas de la causa. Quiero agradecer además los aportes de Jorge Boccanera, Rogelio García Lupo, Marcelo Simón, Juan Bobbio, Marcos Martínez y Horacio Marmurek y los de otros que comprensiblemente han preferido no ser nombrados.

Es seguro que durante la investigación y escritura de 1976, *El golpe civil* he amarreteado tiempo a mis amores: a mi hijo Hernán, a mi mujer Silvia Schujer. Si en algo compensa, este libro es para ellos.

INTRODUCCIÓN

El combo militar-civil

Había olor a pólvora en el aire, gusto a plomo en la boca, hombros inclinados en el miedo y la resignación, cuando transcurría el mes de marzo de 1976.

Pero en ciertos espacios institucionales, en cuarteles, plazas de armas y oficinas de los uniformados, mandaba el ajeteo. Los ascensores de los comandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea exigían a fondo sus poleas. De allí salían oficiales que imponían sus jinetas en conciliábulos, que bajaban órdenes terribles e inapelables mientras se agazapaban para el zarpazo mayor.

El golpe militar que derrocaría al gobierno constitucional de María Estela de Perón estaba cantado. Aunque en los despachos los legisladores del oficialismo peronista enhebraran sin ganas, resignados y por inercia, especulaciones sobre una salida salvadora, las bocas del Congreso expulsaban civiles cargados de paquetes. En el bloque radical tenían tal caracterización de la *manu militari* que se venía, que decidieron retirar el busto de Hipólito Yrigoyen por temor a que fueran humilladas hasta las estatuas.

El general de caballería Carlos C. Delía, uno de los pocos con perfil aristocrático y ascendencia entre la primera línea de la promoción militar golpista, que había jugado un papel

clave para que Jorge Rafael Videla trepara a la comandancia del Ejército en 1975, se reunió con el inminente dictador ya en el umbral del cuartelazo y le dijo:

—Che, si esto se viene, ¿por qué ustedes no cambian ideas con el ámbito civil, por ejemplo con el CEA (Consejo Empresario Argentino), donde hay tipos brillantes?

Videla le respondió:

—No. No hay que comprometerse con nadie.

La frase seca, la mirada firme, convencieron a Delía de que la dictadura militar que se avecinaba se cerraría sobre sí como ninguna otra antes: no le regalaría la fachada pública a la mascarada fascista de José Félix Uriburu como en 1930; ni le cedería el poder fáctico al entreguismo de los sectores comerciales y agroexportadores como el fraudulento general Agustín P. Justo; tampoco le abriría paso al nacionalismo contradictorio y variopinto a la manera de los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, como en 1943, para que terminara derivando en un indigerible «populismo»; no caería en la falsedad de decir «ni vencedores ni vencidos» como en 1955; no se enfrascaría en una lucha interna entre azules y colorados como en 1962 mientras se escudaba en un civil patético como José María Guido; tampoco ensayaría un Estado corporativo para encubrir a los abogados de los monopolios como en 1966.

No.

El golpe, este golpe, sería plenamente militar, ciento por ciento militar, aunque el ecuestre general Delía no acertara a entender muy bien en qué consistiría eso. Pero sería militar, sí, porque Videla, el asceta insobornable, definido por el mismo Delía como el hombre «de la máxima dignidad» para encarar las responsabilidades del Estado, le había dicho:

—No. No hay que comprometerse con nadie.

Tres días después Delía se decepcionaba.

—Yo nunca hubiera contestado como me contestó Videla. Porque ahí nomás se arma la podrida y precisamente del CEA

sale (José Alfredo) Martínez de Hoz como ministro-superministro. Sale como rey de la Economía.

Martínez de Hoz era el titular del CEA, grupo de la elite empresaria argentina constituido en 1967 para defender el libre mercado pero, a la vez, para presionar y exprimir al Estado con su poder de *lobby*. Tales empresarios habían sentido amenazada su tasa de ganancia y sus estatus patronales con la apertura política de 1973 y con una sociedad móvil y reclamante, en la que la guerrilla soñaba con asentarse para avanzar con su proyecto. Pero a esos hombres de negocios les preocupaba más, mucho más, la toma de conciencia de los sectores populares, la militancia fabril, la politización de los sectores medios, el soplo fuerte de los discursos críticos en el ámbito cultural.

Al fin, lo que los complicaba era toda esa marea de movilización y de transformaciones en la dinámica política presente desde la resistencia tras la caída de Juan Domingo Perón en 1955, junto con los cuestionamientos al poder a escala nacional, continental y mundial que desbordaban desde la segunda posguerra. Esos cuestionamientos que mostraban sus dientes en las luchas anticolonialistas o en las rebeliones estudiantiles de los países centrales y periféricos y encontraban aquí sus representantes apasionados y sus formas propias, latinoamericanistas, peronistas, sindical-clasistas, democráticas, marxistas, cristianas. Eso sí hostigaba sus posiciones y eso era lo que había que decapitar masivamente.

A despecho de la prescindencia de los civiles anunciada por Videla, Martínez de Hoz era designado ministro de Economía para dismantelar las —después de todo— módicas cuotas de modernización nacional. Lo que se aproximaba era el rediseño regresivo del país en su conjunto con un anclaje fundamental en la economía. Así definió el nuevo encuadre el investigador Eduardo Basualdo: «La estrategia dictatorial tuvo el propósito de interrumpir la expansión industrial para disolver las bases de la alianza vigente entre la clase trabajadora y la burguesía

nacional y, al mismo tiempo, restablecer las relaciones de dominación en función de los intereses de los sectores dominantes que constituían su sustento económico y social».

¿Estábamos entonces ante el golpe más militar de la cadena de golpes militares del siglo XX argentino? Una primera lectura arroja una respuesta afirmativa: en cuanto a la ocupación de los estamentos del Estado por parte de la grey uniformada, sí. En cuanto a la masiva presencia territorial por una ferretería de corceles y de aceros, también. Si se extiende la mirada sobre la militarización de la vida pública, no caben dudas. Si se analiza el lenguaje cuartelero que atravesó la vida social a través de los medios de difusión, no hay más que hablar.

Pero, sobre todo si se repasa la represión, es posible reiterar el sí y firmar al pie. El ejército diurno copando todas las paradas de la vida civil y el nocturno serpenteando entre chupaderos para despellejar, torturar, matar, quemar, arrojar cadáveres en los vuelos de la muerte, apropiarse de niños y poner en movimiento la más eficaz y perversa máquina desaparecedora, presentan a las Fuerzas Armadas y de seguridad como un bloque monolítico y juramentado como jamás se había visto en la Argentina, aunque ya hubieran transcurrido las tres cuartas partes del siglo bajo una omnipresente custodia cuartelera, expresada de diferentes formas y precedida por cinco golpes de mano que las habían llevado al manejo directo del Estado.

Pero los golpes en la Argentina, desde 1930, o antes, desde diciembre de 1810, cuando un movimiento conservador decapitó al jacobinismo en el primer gobierno patrio, concluían siempre deshilachados y finalmente vencidos por las pujas internas. Había una experiencia muy cercana: la grandilocuente Revolución Argentina, encabezada por el general Juan Carlos Onganía en 1966, se había derrumbado entre las pujas de nacionalistas y liberales a partir de disensos que no le permitieron enfrentar con eficacia la extendida rebelión social.

Era siempre la misma revulsión colorida: los verdes del Ejército; los blancos y azules de la Marina; los indefinidos griseos de la Fuerza Aérea. Todos pispiándose de reojo. Y hacia adentro de cada fuerza —sobre todo en el Ejército— la altivez de la caballería versus la presunta rusticidad de los infantes.

No sería así esta vez.

No sería así el Proceso de Reorganización Nacional. El Equipo Compatibilizador Interfuerzas se había formado en diciembre de 1975, con el golpe ya decidido y fechado, precisamente para desdibujar esas tensiones de otrora.

El poder se repartiría en el 33 por ciento para cada fuerza. Por encima del mismísimo presidente de facto (Jorge Rafael Videla) mandaría una Junta Militar aunque Videla retendría la jefatura de Ejército, Emilio Eduardo Massera encabezaría la Armada y Orlando Ramón Agosti la Fuerza Aérea. Esa organización tripartita sería el órgano supremo del Estado.

El 33 por ciento para cada fuerza bajó y serpenteó por todos los ministerios, secretarías y subsecretarías. El jefe de los marinos, Massera, el que menos podía disimular en público y en privado su regusto por el poder cercano, fue el principal diseñador del revoleo tripartito de cargos. No importaba que en 1976 el Ejército tuviera 80.000 hombres, la Armada 30.000 y la Fuerza Aérea 18.000. La repartición en tercios era una ley para evitar que el peso de un caudillo omnipresente y su posterior debilitamiento arruinaran el proyecto de poder. También para algo más decisivo: que nadie se quedara afuera de un pacto de silencio criminal. Que todos y cada uno, en su medida, limpiaran y ocultaran esas manchas de sangre que marcarían a los establecimientos militares y las cuevas del terror que quedarían bajo su control operativo.

Esa parcelación del poder sería luego acremente objetada: ¿cómo el Ejército se permitía dejarse llevar de las narices por un jefe marino ambicioso a quien, estaba claro, no le hacía falta comer espinaca para arrancarles concesiones a los Brutus

de verde? Pero la tripartición del poder fue un hecho ofrecido al altar de esas verdades celestiales que Videla repicaba: la sacrosanta «unidad de las Fuerzas Armadas». Cuando la trifásica presencia debió compartir espacios en un mismo ámbito saltaron aún las señas jocosas del error: los muchachos se pelearon hasta por las gomas de borrar y las cajitas de clips, prolegómeno de peleas por otras cajas más abultadas.

Pero puestos en marcha los motores del golpismo, la mentada unidad de las tres fuerzas se estampó con un lacre de sangre coagulada. El embajador norteamericano en el país, Robert Hill, se exaltaba en un memorándum interno con destino a su Departamento de Estado: «La posición de los Estados Unidos: Éste debe ser el golpe más civilizado y mejor planeado de la historia argentina».

Juego de colores

Por entonces estaba muy claro que a la civilización de los países periféricos la ordenaban los militares en línea directa con el Pentágono. Si no era así, a esa civilización se le colgaba el cartel de anarquía, caos, totalitarismo. Y el Ejército que comandaba Videla desde 1975, si para algo se mostraba apto, era para civilizar con las armas en la mano. En términos políticos, ese Ejército —incontrovertible punta de lanza de todos los cuarteles y de la ideología castrense en su conjunto— era igual a sí mismo pero se sucedía en otros términos. Tras derrocar al peronismo en 1955 había triunfado el ala más liberal, encabezada por Pedro Eugenio Aramburu, sobre el clericalismo nacionalista que expresaba Eduardo Lonardi, pero las zonas grises entre ambos bandos no resultaban menores. En la era posperonista un grupo de oficiales superiores fuertes, entre los que se contaban Alejandro Agustín Lanusse, Alcides López Aufranc, Osiris Villegas y Julio Alsogaray, habían reinado cuarteles adentro y

protagonizado la vida pública mientras se sucedieron los golpes de 1962 (contra el desarrollista Arturo Frondizi) y de 1966 (contra el radical Arturo Umberto Illia), que habían triunfado en elecciones (1958 y 1962) vaciadas de legitimidad por la proscripción del peronismo. Aquellos oficialotes sacapecho eran, por ascendencia en la tropa y voluntad política, «los leones».

Testimonios de generales ideológicamente tan distantes entre sí, como Horacio Ballester (que integra el Centro de Militares para la Democracia, CEMIDA) y el mismo López Aufranc —golpista sempiterno, anticomunista fervoroso, represor entusiasta— coincidieron en que «los leones» situados claramente a la derecha del espectro político pero con serias diferencias a la hora de buscar fórmulas en pos de un país gobernable, ahogaron a las promociones siguientes de oficiales superiores, decapitaron el disenso y pasaron a retiro o a disponibilidad a todo aquel que asomara con discursos «populistas» o que objetara el alineamiento sin matices con las potencias hegemónicas, sobre todo con Estados Unidos. Nadie debía hacerles sombra. Detrás de «los leones» sólo quedaron en pie los «mansos», acostumbrados a bajar la cabeza ante las voces cuarteleras y atronadoras de sus jefes. El general retirado Ballester fue quien expresó un asombro que más adelante explicaremos: «Cuando esos mansos llegaron a su vez al generalato no quisieron que nadie les complicara la vida con posturas críticas. A partir del '76 esos mansos, como Videla, son los que dejan actuar a los locos represivos como (Alfredo) Astiz o como el coronel (Roberto) Roualdés».

La promoción '73 del Colegio Militar de la Nación, de la que Videla había egresado en el sexto lugar con un promedio de 8,61 junto con su dilecto Roberto Eduardo Viola y con Guillermo Suárez Mason, había ascendido por el escalafón militar entre esas ráfagas cruzadas de pasión política, bajo las que se movió en zigzag como táctica de supervivencia. Ese instinto de conservación no preservó a esta camada de las líneas ideológicas dominantes. El derrocamiento del gobierno de Juan Domingo

Perón en 1955 había acentuado el sesgo conservador y antiobrero de las Fuerzas Armadas. Tras el desiderátum occidental y cristiano de combatir al comunismo, los mandamientos se ampliaban a sus variantes locales: hacer tabla rasa con el peronismo y con toda forma de gobierno que, según un tribunal tácito proveniente de los mismos hombres de armas, pudiera ser tildado como «totalitarismo».

Pero en las Fuerzas Armadas y, sobre todo, en el Ejército, por el que evolucionaban grado a grado Videla y su futuros cómplices dictatoriales, había quedado flotando el espíritu deliberativo gestado en la conspiración antiperonista. No se trataba de una fuerza monocolor. Con origen en la variedad cromática de los juegos bélicos y las maniobras militares se distinguieron dos bandos: los azules y los colorados. Estos últimos se proponían por sobre todas las cosas asfixiar al peronismo hasta llevarlo a su muerte política y desbaratar las organizaciones sindicales. Las estructuras laborales, con sus redes de defensa legal, salud, esparcimiento y deportes tenían para ellos un valor y una cualidad ponzoñosa que enfermaría a todo el cuerpo social. Para extirpar el veneno el precio era suspender toda variante de institucionalidad y estaban dispuestos a pagarlo. Cultivaban un constitucionalismo hipócrita e imposible: la Carta Magna volvería a cobrar vigencia plena cuando el país estuviera a salvo de toda posibilidad de representación popular.

No menos restrictivos con respecto a los derechos laborales resultaban los azules, que sin embargo conservaban la aspiración a un cauce institucional, algunos aun con el sueño de un «peronismo blanco», un símil de «buen salvaje» que les permitiera aceptar a las masas peronistas dentro de una simulación democrática, sobre todo como multitudinarias proveedoras de votos.

Las líneas grises, las amistades, la frecuentación social y hasta los cruces de parentesco desmienten esa puja colorida como estrictamente binaria. Sin embargo, la división alcanzó para que se sucedieran asonadas militares, movimientos tácticos sobre la

superficie de un país que los miraba impávidos y que se hubiera divertido como si se tratara de jocosas y simuladas luchas de catch, de no ser porque entre las víctimas de esos alardes bélicos había soldados veinteañeros que cumplían el servicio militar obligatorio en algún cuartel regentado por cierto coronel que se había dormido colorado y despertado azul.

De ese desconcierto daría cuenta el mismo Videla en el primer reportaje concedido para el libro *El Dictador*: «Azules y colorados eran como una entelequia. Es muy difícil explicar qué era una cosa y qué era la otra, y cuál era la diferencia. ¡Yo tenía íntimos amigos que estaban en otro bando y pensaban igual que yo! Podría decir que en parte era una cuestión de armas, y que yo era colorado porque la Infantería lo era, mientras la Caballería era azul. Hay quien dice que lo que realmente estaba en juego era dirimir la supremacía entre las armas para ver quién iba a heredar a Frondizi. No puedo explicar por qué yo era colorado. Quizá puedo decir porque era infante o porque éramos más antiperonistas. ¿Pero es esto cierto? ¿Y Lanusse entonces? ¿Había alguno más antiperonista que Lanusse? Después está el tema de que unos eran más trenceros que otros... distintas explicaciones, en fin.»

La pobreza conceptual de Videla no sólo da cuenta de su sempiterna incapacidad de complejizar los fenómenos políticos. Ilustra también una hibridez y una mixtura ideológica castrense que tendrá su expresión en las alturas del poder asaltado. Juan Carlos Onganía, el dictador de la Revolución Argentina de 1966, era azul por su expreso nacionalismo católico, pero cerró su política económica como un colorado, poblando su elenco de neoliberales ligados al sector externo. Su noqueador y sucesor, el teniente general de caballería Alejandro Agustín Lanusse, era un colorado de pura cepa, que había estado preso tras participar de una rebelión militar contra Perón en 1951, pero en los 70 devino legalista y debió enfrentarse a quienes se oponían al más mínimo atisbo de salida política.

El Ejército y las Fuerzas Armadas que heredan y realimentan los protagonistas del Proceso de Reorganización Nacional cocinan su guiso crepitante entre los ejes y los desvíos de aquellas dos grandes líneas. Los grupos y subgrupos hacen metástasis en el marco de una mecánica típicamente cuartelera donde el sistema de lealtades juega fuerte como en toda organización militar. Como lo señala Alain Rouquié, los núcleos ideológicos no siempre obedecen a convicciones, proyectos o doctrinas sino que, en gran parte, derivan de una pura oposición ante la incomodidad de un país móvil en el que «las clases subalternas» habían comenzado a tener rostro en las calles y unos pesos en el bolsillo como beneficiarios de una mayor participación en la renta durante el peronismo, cuando les cupo el 53 por ciento de la torta nacional. Gran parte del espectro militar, al menos entre la oficialidad superior, coincidía sí en la imperiosa necesidad de «desperonizar» la política, y sus cabezas más calenturientas imaginaban esa peronización popular como la puerta de entrada al comunismo.

Enemigos por todas partes

Para que el procesismo derivara en un sancocho sangriento otras especies concurrieron a condimentar la formación cuartelera, una en especial: la Doctrina de Seguridad Nacional, surgida en Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría que ya había sido aceptada e introducida por el ongiato. En ella se demonizaba a la figura del «enemigo interno», se adjudicaba a los ejércitos de Latinoamérica la misión de mantener el orden fronteras adentro de cada país y se inficionaba en las Fuerzas Armadas la idea de ser el último baluarte moral de cada país y de la región en pos de que el bloque occidental saliera victorioso de una sorda Tercera Guerra Mundial.

El avance de la ideología represiva venía a completar las instrucciones de los militares franceses que a partir de 1958 —los

primeros contactos se habían formalizado en 1957— comenzaron a traspasar a sus pares argentinos el *know-how* de las más sofisticadas variantes de la tortura para obtener información de la insurgencia anticolonialista, algo que habían practicado pavorosamente en Argelia. La Escuela de las Américas, con sede en Panamá, cuartel de formación práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional, perfeccionó el repertorio del terror mientras la revolución cubana se asentaba como un referente peligroso y cercano y las desventuras estadounidenses en Vietnam eran expuestas a la faz del mundo.

Al nacionalismo clerical, preconiliar y antisemita, al Ejército de raigambre prusiana, a los liberales que pretendían hacer valer sus jinetas para morder las ganancias de las multinacionales, estas variables de la escena internacional les calzaron como un guante. Un enjundioso general, Guillermo Osiris Villegas, le ponía su plus altisonante a la cruzada mentando un «enemigo oculto» que compraba ideología extranjera y hasta era capaz de desnaturalizar el malambo en manos del rock naciente. De la sacrosanta lucha contra el comunismo y los «enemigos de la libertad» se pasaba al objetivo verdadero: obstruir y licuar a los sindicatos, a los medios de difusión, a las universidades, a los partidos políticos, a la cultura, con una «guerra permanente» que también empaquetaba bajo el mismo moño al psicoanálisis, a la minifalda, a las temibles transgresiones del lunfardo y hasta algún melancólico bordoneo que hablara de quejas y desagravios.

Los hombres de armas que desembocan en el plan criminal del '76 ascienden al podio de la oficialidad superior acorazados ante una sociedad reclamante y dinámica y un odio cerril al cambio, aunque utilizaran el desarrollo capitalista como horizonte de modernización.

El Ejército envasaba en sus filas predominantes todo el espectro de las ideas literalmente reaccionarias. La Armada había sido puntal del antiperonismo beligerante. Sus humores

la acercaron a los colorados. La Fuerza Aérea, contaminada por civiles ultramontanos que impartían clases en los claustros militares como Jordán Bruno Genta, rimaba más su ideología con el nacionalismo católico, algo que la hacía aparecer más cercana a los azules. Ni el pretendido *charme* de los marineros, ni la salmodiada moral cristiana de los aviadores quedarían en pie tras la dictadura videlista.

La Marina gestó uno de los dos grandes campos de desaparición, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un infierno al que fueron empujadas unas cinco mil personas y donde se practicaron las más brutales y variadas técnicas de tormento y exterminio. La Fuerza Aérea, de aparente bajo perfil, realizó verdaderas misas negras en sus chupaderos, donde curas demoníacos rezaban el rosario durante las sesiones de tortura en pretendidos actos de purificación que Satán bien podría celebrar como su verdadero triunfo bajo el reino de los cielos. En Campo de Mayo, el Ejército había montado su propia versión del Séptimo Círculo.

Al fin, lo que se había resuelto ya en 1975, junto con el asalto al Estado, era la puesta en marcha de una aplastante acción desmovilizadora. En los cuarteles pasa de generación en generación una mezcla de broma y amenazante recomendación que cae sobre los soldados apenas ingresan y que dice más o menos así: «si se mueve se lo saluda, si está quieto se lo pinta». El chascarrillo fue llevado al cuerpo social en otros términos: «A todo lo que se mueve hay que exterminarlo o paralizarlo; a todo lo que está quieto hay que celebrarlo y asimilarlo a la idea de Patria».

El espectro ideológico de los hombres de armas que asaltan el poder el 24 de marzo de 1976 se movía en un dial que iba del liberalismo conservador al nacionalismo católico con una profusión de matices en el espectro. Había, desde ya, notables diferencias internas y muchas no se pudieron ocultar una vez que estuvieron en el gobierno. Pero un elemento de nuevo

y viejo cuño cementó todas las diferencias: la matanza y la desaparición.

En otra entrevista concedida para el libro *El Dictador* en 1998, fue también Videla el que puso en blanco sobre negro la decisión del exterminio: «Había cuatro opciones [...]. La cuarta era la más intensa. Atacar en masa, con todo, en todo el terreno». Una vez decidida esa opción —dijo Videla— «el que no estuvo de acuerdo se fue», como los generales Rodolfo Mujica y Juan Antonio Buasso. A otros ya los habían desplazado en movimientos internos, como al general Francisco Rosas; algunos se retiraron a tiempo para no ser cómplices de la carnicería, como el general Alberto Samuel Cáceres; otros oficiales incómodos fueron presos, como el coronel (R) Luis César Perlinger. También hubo quienes compartieron la tragedia de miles de connacionales: el teniente coronel (R) Bernardo Albarte fue arrojado al vacío desde un sexto piso la misma noche del golpe, el teniente Jorge Devoto, de la Armada, engrosó la lista de desaparecidos, arrojado vivo y lúcido por sus camaradas desde un avión de su fuerza.

Ahí vienen los rancios

El golpe parido el cuarto día del otoño de 1976 apareció ante la opinión pública como militar-militar. El primer gesto institucional de nombrar «delegados militares» en cada sillón del gabinete nacional lo señalaba. En el Ministerio del Interior se ubicó el general Cesáreo Ángel Cardozo; en Relaciones Exteriores, el contraalmirante Antonio Vañek; en Justicia, el brigadier Julio Arnaldo Gómez; en Defensa, el brigadier Pablo Osvaldo Apella; en Economía, el general Joaquín de Las Heras; en Educación y Cultura, el contraalmirante César Augusto Guzzetti; en Trabajo, el general Lucio Harry Mazzola y en Bienestar Social, el general Reynaldo Benito Bignone.

Los generales que ocupaban los altos mandos de Ejército y las unidades de mayor poder provenían del bando colorado en lo que habían sido las pujas de los años 60. Para una fuerza ya largamente marcada por los apellidos de la inmigración, la cúpula mostraba una presencia excesiva de oficiales provenientes de los estratos más altos de la sociedad argentina, de la cual el propio Videla era representante aunque proviniera de un patriciado venido a menos, de esos «pobres de solemnidad» que acumulaban capas de resentimiento y que habían encontrado en las Fuerzas Armadas una manera de «pertenecer», al menos en sus formas externas, a una clase que ya no los reconocía por su depreciado nivel económico.

Un lenguaje salvacionista que mentaba con frecuencia a la palabra «patria» sonaba con trasfondo de banda militar. Pero pronto quedaría claro qué escondía esa fetichización patriótica: la preponderancia contundente otorgada a un grupo civil identificable de la vida económica, los sectores dominantes locales, ligados como socios menores a los monopolios extranjeros.

Cinco días después del golpe y de las intervenciones militares a todos los ministerios, el 29 de marzo, quedaría develada la intención de fondo del Partido Militar con la entrega del poder llave en mano a José Alfredo Martínez de Hoz, estatua viviente del conservadorismo liberal, descendiente de hacendados beneficiados con aproximadamente 2.500.000 hectáreas cedidas por el general Julio Argentino Roca luego de la Campaña del Desierto. También conocido como «Joe», este abogado, economista, profesor universitario y político —había impulsado la fundación de la Democracia Cristiana durante el peronismo—, tenía vastos intereses en el mundo empresarial y había pasado por la dirección de estancias y de las firmas Buenos Aires Compañía de Seguros, Ítalo Argentina de Electricidad, Petrosur, Acindar y Rosafin, entre otras. También había sido ministro de Hacienda del presidente títere José María Guido, en el mismo

período en que el general Guillermo Osiris Villegas era ministro del Interior, entre 1962 y 1963.

Su figura sintetizaba un poder económico entramado con el Estado que venía desde el fondo de los tiempos, simbolizaba a las clases dominantes que se asimilaban plásticamente a la «patria» y que habían sido conmovidas por la dinámica político-social generada por la inmigración, el sufragio universal y secreto y los mayores niveles de redistribución de la riqueza puestos en marcha por el peronismo.

En todo el proceso político y económico del siglo XX, los intereses de los Martínez de Hoz y los del bloque económico al que pertenecían, se habían sentido ligeramente lastimados y luego rehabilitados con las reposiciones en el poder obtenidas tras los golpes de 1930 —derrocamiento de Yrigoyen— y de 1955 —derrocamiento de Perón—. Pero en los 60 y 70 su nerviosismo fue creciente: la posibilidad de que se expresara una sociedad móvil, abierta y reclamante amenazaba con alejarlos, acaso para siempre, de un trono sociopolítico del que se sentían dueños naturales.

Para estos grupos, toda pérdida de terreno en manos de una democracia aun restringida y de nuevos parámetros de distribución aun limitados había sido, durante el siglo XX, una cuestión de dinero, siempre. Pero hubo en danza algo más: la imposibilidad de digerir que la dirección del país no estuviera en sus manos, que debían someter su diseño económico a una compulsa popular, que al esquema feudal de las estancias no se lo podía hacer coincidir con la organización nacional. Los bloques dominantes, como los psicóticos, con pocas ideas pero fijas, no podían concebir el país sino como párvulo asociado a las grandes potencias. Y menos aún que la movilidad social ascendente comprometiera su privilegiada circulación clasista. Había que eliminar los laboriosos, trágicos pero también festivos avances de la sociedad plural en sus diversas manifestaciones. La violencia política, el genérico enemigo «subversivo», resultó propicio

para emprender aquella gran tarea desmovilizadora. La brusca caída de la participación de los asalariados en el producto bruto interno, del 48 al 29 por ciento en 1976, dio cuenta enseguida del modelo de fondo.

Desde octubre de 1975, las Fuerzas Armadas contaban con el instrumento que habían requerido para inventar su guerra civil. El senador justicialista Ítalo Luder, como presidente provisional durante una licencia presidencial que se había tomado Isabel Perón, dictó los decretos 2770 y 2772, que cedieron el control de la seguridad a los uniformados y que los habilitaba para el «aniquilamiento de la subversión». Sin embargo, los dos grupos guerrilleros más activos ya estaban en retroceso franco. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pronto sería totalmente diezmado, y la capacidad operativa militar de Montoneros, el numeroso grupo de la guerrilla peronista de izquierda, marchaba hacia su ocaso político y, sobre todo, militar. Como lo debieron reconocer las autoridades de facto durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, sólo un octavo de las desapariciones en manos del terrorismo de Estado perteneció a militantes que habían optado por la lucha armada. Lo importante era el resto, los militantes sindicales, políticos, culturales y sociales. El abarcador mote de «subversivo» operó como palabra mágica en pos de librar a las Fuerzas Armadas de todo prurito moral y así poder avanzar hacia la purificación sangrienta para imponer un modelo socioeconómico preciso. La sacralización de la lucha contra «el marxismo y la subversión» las relevó de cumplir con cualquier ética usual, aun la que provenía de la religión que decían defender, inventándose para sí un Dios vengativo y canalla dispuesto a cristalizar un estado general de sumisión cívica y de sobreexplotación humana.

El plan que pusieron en danza los militares, de base ultraliberal, tuvo sus variantes argentinas: el Estado no se achica ni se retira en los términos vociferados sino que se pone al servicio del reciclaje de los grupos dominantes a los que las Fuerzas

Armadas les entregan la economía. Sus instrumentos son las transferencias y subsidios a los grupos de poder resucitados; un régimen de promoción industrial estrictamente dirigido a los socios y planificado para no molestar a los importadores; un desapoderamiento extorsivo de empresas para dejarlas en manos de quienes habían asaltado el Estado, como lo demostraron los casos Gutheim, Papel Prensa o Grecco, entre tantas otras «transacciones» dirimidas en las mesas de tortura o en crímenes de esbirros policiales o parapoliciales como Raúl Guglielminetti, que obtenían, con sus servicios, tajadas menores.

Lo que hace el Partido Militar al cederle la economía a Martínez de Hoz y a su núcleo duro es, como veremos, mucho más que una adaptación libre del predominio del capital financiero sobre el quehacer industrial: es reconstruir el capitalismo argentino en los términos más retrógrados posibles. Por lo tanto, aquel «no hay que comprometerse con nadie» que Videla le había arrojado a su camarada Delía en los días previos al cuartelazo era una burda mentira en aras de un secreto militar ya decidido: la más rancia civilidad volvería por sus fueros.

Así pudo verse en el gabinete económico presentado aquel 29 de marzo. Además de Martínez de Hoz, dieron el presente otros civiles cuarteleros: Guillermo Walter Klein (Programación y Coordinación Económica), Juan Alemann (Hacienda), Guillermo Bravo (Comercio), Raymundo Podestá (Industria), Guillermo Oscar Zubarán (Energía), Fernando Puca Prota (Recursos Naturales), Mario Cadenas Madariaga (Agricultura y Ganadería), Alberto Fraguío (Comercio Exterior) y Federico Camba (Transporte y Obras Públicas).

En el Ministerio de Educación asumiría Ricardo Pedro Bruera, un nacionalista católico santafesino que había sido subsecretario de Educación desde 1970 con el general Roberto Marcelo Levingston y ministro de Educación de Santa Fe durante la dictadura de Lanusse. Su misión fue desarmar los circuitos de conocimiento por los que se habían introducido «ideologías

contrarias al ser nacional». Para lograr ese objetivo se intentó la creación de una red de espionaje hacia adentro de los establecimientos; se invitó a los chicos a la delación y se dieron pautas esperpénticas para que identificaran a los «enemigos subversivos» entre los párvulos, proponiéndoles relacionar droga-pornografía-marxismo, un tridente ofensivo contra el arco mayor de la patria que bien podría asaltar a cualquier adolescente por las noches mientras recordaba el escote de la profesora de química o las piernas peludas del profe de educación física.

Parafraseando al dramaturgo Ricardo Monti, si estos planes no hubieran sido trágicos hubiesen resultado simplemente ridículos. Pero en el ampuloso Operativo Claridad que se proponía enjuagar la cultura móvil que había crecido en los 60-70 ingresaban desde la crítica costumbrista de Roberto Cossa hasta las canciones folklóricas de Horacio Guarany.

El Proceso de Reorganización Nacional —nombre debido a la inspiración de otro civil, Jaime Perriau, en claro homenaje a la organización roquista que el videlismo se proponía resucitar, aunque no en sus arrestos laicos— tenía pretensiones de rediseño total. Librar la batalla en la cabeza de las nuevas generaciones para que un sol cristiano y preconiliar brillara en el cenit de su mandato. Se trataba de limpiar cerebros para que los patrones de acumulación no volvieran a ser amenazados.

Civiles para una economía con distribución regresiva. Civiles para una educación donde una teológica «razón superior» fuera determinante de la peripecia existencial. Recuperación y acentuación de los valores cristianos para borrar las aspiraciones a la satisfacción corporal. También para disolver la lucha por una mejor repartición de los bienes terrenales con una ideología solidaria y colaborativa que terminara amenazando una Razón Patriarcal ante la que solo cabía prosternarse. Civiles en economía: brusca erosión del valor del trabajo y veloz pauperización de los trabajadores. Civiles en educación: formación de subjetividades para soportarlo resignadamente. Obsequiosos civiles

en Cancillería y en los fueros judiciales para tratar de reparar la imagen negativa de la dictadura en el exterior, en el primer caso, y para cerrar los ojos ante la violación a las normas más básicas del derecho, en el segundo.

Más garcas que oligarcas

Este primitivismo ideológico imperante en la dictadura videlista pudo tener y tuvo nuevas formas, pero es hijo dilecto y directo de las peores constantes de los bloques dominantes locales que, así como necesitaron de la Campaña del Desierto y del roquismo para instaurar una institucionalidad estrictamente ligada a sus ambiciones rentísticas, requirieron del golpe militar, del fraude electoral y de la picana para volver al poder en los años 30. Sus descendientes directos son los que en el '76 recurrieron a la matanza masiva en pos de eliminar los cuerpos de la rebeldía surgidos de una realidad compleja y de una dinámica política tan inevitable como el paso del tiempo.

Por ese camino, alfombrado por las Fuerzas Armadas, no ya la oligarquía —también complejizada por el devenir del capitalismo del siglo XX—, pero sí los portadores del añejo pensamiento oligárquico, retornaron a sus más caros sueños antidemocráticos:

- La recolocación plena en el Estado como red para la protección de sus negocios, tal como había sido en el origen de la vieja oligarquía.

- Un pálido desarrollo científico-técnico cedido a las corporaciones extranjeras.

- Los ajustes económicos periódicos como truco de traspaso rentístico.

- Un devenir económico magro ya que, sin la molesta presencia de la política, no resultaba necesario buscar acuerdos con otros sectores de la sociedad como los partidos y sus tramas

de intereses, el pequeño y mediano empresariado portador de otro perfil de crecimiento —y sobre todo— los obreros representados en los sindicatos.

Para que esto se cumpliera, un espiritualismo soso, cerril, salivado con una vocinglería patriótica y religiosa, cementó el circuito de la desnacionalización económica y de la muerte, dos de las grandes herencias de la «Reorganización».

Los barones de la dictadura, con uniforme o sin él, no decían cosas muy distintas de las que el nacionalista Manuel Gálvez había expresado en el Centenario, cuando pedía «la expulsión del país de todos los apóstoles de las religiones extranjeras y doctrinas sociales internacionales». No decían cosas muy distintas a las de Leopoldo Lugones en 1923, cuando clamaba por una matanza de extranjeros anarquistas y socialistas ya que «no sería una guerra civil, sino una guerra nacional». Los barones del «proceso» decían cosas peores. No les hacía falta siquiera esa displicente adaptación a la corrección política que formalmente pide la democracia. Se podía decir la verdad, algo que proclamaron de mil maneras: vamos a matar a todos los que asomen la cabeza porque queremos volver a respirar el noble perfume de una sociedad atravesada por la sumisión.

Ni los restos de la oligarquía, ni quienes se habían reciclado en la transnacionalización de los negocios y la creciente importancia del capital financiero, eran estrictamente los muchachos del Club del Progreso del 900, ni los señoritos de la Liga Patriótica que habían salido a matar y apalear judíos en 1919, ni los fascistas con olor a pasto de los 30. Pero se respiraba un aire antiguo, un ancestral pedido de poder absoluto y, como nunca antes, los sectores dominantes tuvieron esa soberanía con Jorge Rafael Videla en la detentada presidencia. Ejercieron esa soberanía hasta el fondo: hasta el dominio de los cuerpos, del mismísimo reino de la Muerte, de las muertes de las que pretendieron también apropiarse.

A semejante núcleo arcaico de pensamiento y a sus consecuencias en la acción —los campos de desaparición, el incremento de la tasa de explotación en todos los niveles, el control y la represión de la vida pública—, le cabe clásicamente su asimilación con el Mal, si es tomado en su etimología más clásica: «lo que se aparta de lo lícito y lo honesto». Pero también si actualizamos el vocablo y lo definimos como el deseo irrefrenable de retornar a etapas previas a la evolución del derecho y de la política para ejercer el poder a fondo y en su expresión más exasperada: disponer cruelmente de la vida de los otros.

El ensayista español José Gómez Caffarena redefine la figura del «mal radical», creada por el filósofo alemán Immanuel Kant, como «la desoladora abundancia del mal moral en la historia humana. Violencias innumerables llevadas hasta la muerte, muchas veces con crueldad extrema; explotación incesante del más débil a favor de los intereses del más fuerte; desconsideración inmisericorde de la necesidad y el dolor ajenos». La expresión «mal radical» fue utilizada en más de una ocasión por las organizaciones de derechos humanos en la Argentina en un ingente esfuerzo por aproximarse a una comprensión del horror. Caffarena sostiene que hoy «la expresión mal radical es enormemente sugestiva y se presta muy bien a recoger sin contemplaciones algo que quizá, tras todas las tristes experiencias y fuertes desengaños del siglo XX, se nos impone más que en el siglo XVIII», cuando Kant la echó a circular.

Si algo mata y atrasa en la Argentina, son quienes encarnan ese Mal, quienes participaron y apoyaron activamente el golpe de 1976 y 35 años después circulan con caras renovadas en la esfera pública para reproducir esa sociedad binaria con la que siguen soñando como un retorno a cierta difusa Edad de Oro. En la vuelta de la democracia, tras el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, la masiva satanización de lo militar sirvió para que los golpistas de corbata, esos activos militantes del pensamiento arcaico, se escondieran del escarnio público que también les

cabía. En una cena del Círculo Militar, un Videla ya desactivado se los hizo saber al tratarlos de «desagradecidos».

Los activistas del Mal Argentino son civiles —fundamentalistas cuarteleros o camaleones democráticos, según el clima de época— que sólo disimulan su ansia de dominación total cuando la sociedad les pone freno. Por eso es falso de toda falsedad ver a las Fuerzas Armadas como un pulpo retráctil que se cerró sobre sí. La demonización militar de esos años bien cabe a la luz de la matanza que produjeron. Pero no sirve para que detrás de ella se escondan los civiles carniceros que la prohicieron para reubicar sus sueños soberanos y sus negocios concretos aunque ya no sean —y no lo son— la vieja oligarquía que encarceló a cuatro mil personas para festejar, en 1910, un Centenario con olor a bosta y loas a la España negra y contrarreformista.

El combo militar-civil se arma en ese activismo del Mal. En esa clamorosa cesión del control estatal al primitivismo ideológico. También en la custodia pretoriana de sus intereses y en la incontenible ambición de participar de sus ganancias y de su aroma social. El Mal Argentino echa humo negro desde aquellas concepciones excluyentes y paralizadoras. Es racista. Es clasista. Es matador. Si, como dice Rüdiger Safranski, Auschwitz se ha convertido en un «mito fundacional negativo» con el cual debe contrastarse la historia para medir la reaparición de las fuerzas asesinas y bárbaras, para medir la reaparición del Mal, no cabe duda de que la dictadura videlista se puso a la altura con su microfísica del terror. Ellos eligieron bajar a esos abismos con espantosas variantes acriolladas, para una restauración político-económica que siempre apeló a la muerte como su recurso natural.

La dupla Videla-dictador, Martínez de Hoz-ministro de Economía es la que expresa ese combo militar-civil. Un combo reforzado militarmente por los «colorados» del Ejército encabezados por el ministro del Interior Albano Harguindeguy y desde la civilidad por los grupos de ultraderecha como el de

Jaime Perriau y del denominado grupo La Plata. Este maridaje entre el pietista y «digno» Videla y el empresario inescrupuloso, entre el militar de apellido lustroso —los antepasados españoles de Videla y enseguida cuyanos se remontan a 1602— y el hacendado con recontratatarabuelos en el Cabildo de 1810, define este casorio por interés, disimulado ante la cruz del amor cristiano y bendecido una y otra vez por obispos y cardenales que vieron en la dictadura una nueva epifanía. También muestra en una sola foto la resurrección de la mixtura entre nacionalismo católico y conservadurismo liberal, la suma y síntesis de las ideologías primarias para recuperar una soberanía política ofrecida siempre al mismo altar: el poder del dinero.

Este libro se propone rastrear esa acción civil custodiada por y coparticipada con los militares de los años 70. No es su afán fijarse en un punto, en un origen expropiador y bayonetario, y examinar su devenir repetitivo, menos aún exhibirlo como una fatalidad donde subyace el trajinado y aburrido mito del fracaso nacional. Si el Mal Argentino puede fijarse ya con cierta claridad en la mimetización de nuestros hombres de pro con las burguesías aristocratizantes y salvajes del siglo XIX, cabe tanto investigar su lenguaje reiterado —tan moralizante, tan platónico, tan represivo, tan igual a sí mismo—, como sus sucesivas transformaciones para actuar sobre el terreno, es decir, sobre los cuerpos: la invención de la picana exhibida como gran prestación a todo el orbe represivo en 1930; la compra a paquete cerrado de la metodología persecutoria de las últimas guerras anticolonialistas en los 60-70; el perfeccionamiento de las técnicas de exterminio de los 70 con la dantesca creatividad de los campos de desaparición; la exitosa imposición de un discurso único en los 90; la farandulización y la demonización pública de los pobres con los shocks de inseguridad en los comienzos de este siglo XXI, entremezcladas con un republicanismo y una demanda de pureza institucional diseñada para licuar conflictos y para desdibujar la inevitablemente ríspida disputa por la renta.

Hoy son distintos los mecanismos de apropiación de esa renta. También cambiaron los modos de insertarse en el comercio internacional con la preeminencia del capitalismo financiero y las transnacionalización de los negocios. Hasta los apellidos otrora patricios de la galería pseudoaristocrática son otros. Si bien el pecado original de la organización económica nacional —el despojo de tierras, el latifundio, la renta fácil de la producción extensiva— sigue incidiendo en la vida argentina como una matriz, hoy tiene claras reformulaciones y nuevos derroteros. También cambiaron el juego y la circulación social de los bloques dominantes y es por eso que preferimos hablar de la constancia y la reaparición de un «pensamiento oligárquico» más que de oligarquía a secas, aunque en ocasiones se lo utilice para la oralidad de barricada.

Intentaremos mostrar, asimismo, a qué otros cauces de la sociedad civil, también en los sectores medios y bajos, se abrió el proyecto de reposición plena de una Argentina «occidental y cristiana» y cómo esas anquilosadas formaciones ideológicas siguen incidiendo y aun trasmutándose en esos pasos de comedia que se entreen hoy ante las nuevas formas de la sociedad del espectáculo y el poder mediático.

Tributario de una bibliografía que se cita en el apartado correspondiente, de entrevistas e indagaciones documentales, este libro pide otros libros: investigándolo y escribiéndolo hemos sentido que cada capítulo propone futuras búsquedas periodísticas y otros estudios sociológicos y políticos que seguramente vendrán. Su factura, la frecuentación con los materiales más quemantes de la historia cercana, tiene por objetivo sumarle argumentos y prevenciones a una Argentina posible. Una Argentina donde la pluralidad, el signo de la tolerancia, el abordaje de conflictos aún arduos que deben abrir el camino de necesarias reparaciones, se ponga al servicio de un proyecto convivencial y pacífico, a la recomposición de tantas aspiraciones destruidas apenas asomaron por

el cíclico retorno del país excluyente y represor, por la cíclica reaparición del Mal.

De la ambición abarcadora que propone toda genealogía ofrecemos aquí apenas un recorte que remite al último golpe militar. Sabemos que el accionar político-ideológico nunca se repite de la misma manera, ni siquiera en forma de comedia como dice una celebrada frase de Karl Marx. Con el golpe del '76 eso se puede constatar. Los grupos civiles y sus esbirros del «proceso» han sido distintos de sus antecesores en su sofisticado repertorio de terror. Distintos y peores. Y en esta áspera certeza no hay por supuesto ninguna nostalgia.